

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 5º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-35823-2019
CARATULADO : VILLAR/MANAUD

Santiago, cinco de Mayo de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 26 de diciembre de 2019, a folio 1, comparece doña María Alejandra Arriaza Donoso, abogada, domiciliada en calle San Antonio 378, comuna de Santiago, en representación de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, abogado, domiciliado en calle Diez de Julio N° 1133, departamento 502, torre B, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago.

Expone que los hechos descritos en su demanda han sido reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida también como Informe Valech.

Refiere que si bien existe una clara vinculación de los hechos relatados, por el lugar en que se cometieron y, en algunos casos, por los hechos, además de una similitud en el tiempo, los relatará de manera individual, pero resumidas, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fueron sometidos los demandantes que representa por del Estado de Chile y que constituyen el fundamento fáctico de su acción.

Indica que la Comisión Valech ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieron



Foja: 1

formarse convicción moral sobre dicha condición. Cada caso y cada detención fue objeto de un riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados, investigaciones en bases de datos disponibles y, en un número significativo de casos, mediante una segunda entrevista a la víctima o a testigos. Como se expone en el capítulo sobre los métodos de trabajo, un número considerable de personas que prestaron testimonio ante la Comisión adjuntaron certificados de los organismos que practicaron la detención o mantuvieron a los detenidos en recintos de su dependencia. Otras presentaron documentos tales como salvoconductos, tarjetas de control, certificados de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), sentencias judiciales o piezas procesales que dan cuenta de la privación de libertad. Muchos casos pudieron ser verificados, además, en publicaciones de prensa aparecidas en la misma época de la detención de la víctima, la mayoría originada en fuentes oficiales, como comunicados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, jefaturas de zonas, intendencias, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS). Otra fuente de información para la verificación de los casos fueron los registros de la Cruz Roja Internacional y los Informes de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Organización Internacional del Trabajo. Se utilizó también la información recabada en los organismos nacionales de Derechos Humanos, reunida por éstos en los mismos días en que ocurrieron los hechos relatados, tales como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Vicaría de la Solidaridad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), y Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE). Se recurrió además, en los casos que correspondía, al examen de procesos judiciales, especialmente a aquellos incoados entre los años 1980 y 1990. En un gran número de casos, la Comisión reunió información y documentos adicionales a lo entregado por el peticionario. Igualmente, se analizó cada una de las



Foja: 1

detenciones sufridas por una misma víctima, ya que un número de ellas fueron detenidas o torturadas más de una vez. Cada uno de estos episodios ha sido calificado en forma independiente. Por ello, si bien se certifica un total de 33.221 detenciones, se reconoce la calidad de víctima a 27.255 personas. La nómina incluye a todas las personas respecto de las cuales la Comisión ha alcanzado convicción moral del hecho de haber sido detenidas por razones políticas, sin considerar el tiempo que duró su privación de libertad. Así, se han comprendido aquellos casos en que la detención duró desde días hasta aquellos en que duró varios años. En promedio, las personas estuvieron privadas de libertad por 180,1 días. La comprobación de que las consecuencias de la prisión política y de la tortura no ha dependido necesariamente de su duración, sino más bien de sus características propias, como el tipo de recinto de reclusión, las condiciones de la prisión o la intensidad y métodos de tortura, ha determinado que en esta lista no se distinga por la duración de la prisión. Consecuentemente, el tiempo de prisión no ha sido considerado para las medidas de reparación propuestas. Como se ha señalado, cerca de un 94% de los declarantes respecto de los cuales esta Comisión se ha formado convicción moral de que permanecieron privados de libertad por razones políticas, señalan haber sido víctimas de tortura. Sus testimonios son coincidentes en los métodos empleados, en los lugares, en los organismos a los que pertenecían los agentes y en otras varias circunstancias.

El conjunto de estas coincidencias sirve de fundamento a la convicción moral que se ha formado acerca de la efectividad de la tortura que ha sido declarada. Se ha tenido presente, también, el hecho de que en los primeros años del régimen militar no hubo posibilidad de denunciar las torturas. Sólo luego de algunos años, y cuando las violaciones a los derechos humanos no tenían la masividad del primer período, fue posible a las personas de localidades urbanas donde existían organismos de defensa encontrar la asesoría necesaria para denunciar las torturas. No ha sido posible disponer de la acreditación de la tortura mediante informes médicos u otras formas de constatación de las lesiones o secuelas. Dado el contexto en que ocurrieron los hechos, particularmente en los primeros años del régimen militar, muy pocas personas recibieron atención de salud con el



Foja: 1

objeto de constatar las torturas y algunas permanecieron detenidas por largo tiempo luego de que ellas les fueran infligidas, haciendo prácticamente imposible certificarlas.

Finalmente, tampoco ha sido posible calificar las situaciones de tortura de acuerdo a su gravedad. Luego de treinta años no es posible evaluar lo padecido por una persona de acuerdo a la calificación de su relato o escudriñar en sus recuerdos sin generar una nueva victimización. Por ello, reconociendo el sufrimiento de las personas, la Comisión ha estimado razonable definir una categoría común de víctimas. La Comisión decidió calificar algunas situaciones especiales dentro de los casos reconocidos como víctimas de prisión política y tortura. Algunos de ellos se refieren a situaciones de personas que, siendo menores de edad, fueron detenidas junto a sus padres y en razón de la detención de éstos. Como se señaló al describirse las propuestas de reparación, la Comisión estimó que estas personas, que suman un total de 102, eran merecedoras de una medida de reparación económica diferente. A ellas se agregan las 11 personas que nacieron en prisión. Una categoría diferente son las 978 personas que siendo menores de edad fueron privadas de libertad por sí mismas y no por la detención de sus padres. Esas personas han sido consideradas en la categoría general de víctimas.

La Comisión recibió también los testimonios de personas que estaban en gestación cuando sus madres fueron torturadas, así como de personas que fueron engendradas producto de violaciones cometidas durante la privación de libertad de sus madres, lo que constituye también una forma de tortura. En todos estos casos, las madres dieron a luz cuando habían recuperado su libertad. La Comisión tiene la convicción de que deben ser consideradas como víctimas. Aquellas que estaban en proceso de gestación cuando sus madres sufrieron graves torturas se asimilaron a la categoría de los hijos nacidos en prisión y de los hijos detenidos junto a sus padres. Las que fueron engendradas producto de violación se consideran como víctimas directas. Con todo, y compartiendo el profundo rechazo por la inhumanidad que envuelven estos casos, el comisionado Lucas Sierra estimó que ellos se encuentran fuera del mandato de la Comisión. Esto, por cuanto a ella se le encomendó determinar las “personas” que sufrieron prisión por



Foja: 1

razones políticas y tortura, calidad que no puede predicarse de la vida intrauterina. Además de esta razón de principio, el comisionado Sierra agregó una razón relativa al criterio general seguido por la Comisión frente a los hijos de las víctimas de tortura. Es posible, sostuvo, que la detención y tortura de una madre haya tenido efectos devastadores en el hijo que quedó abandonado por esta situación, peores aún que los experimentados tras el nacimiento por el hijo cuya madre fue torturada durante el embarazo. En el primer caso, sin embargo, la Comisión ha seguido el criterio de no calificar a ese hijo como “víctima” por considerarlo fuera de su mandato. El mismo criterio, concluyó, debería aplicarse al segundo caso. Otra categoría especial en los casos calificados corresponde a aquellas personas que permanecieron privadas de libertad al interior de sus domicilios, en ratoneras o en situaciones de arrestos domiciliarios debidamente certificados y en los que se acreditaron malos tratos, torturas o lesiones. Se trata de personas que estuvieron privadas de libertad y sometidas a una fuerte presión, violencia y en algunos casos torturas, durante días, aunque no hayan permanecido en recintos de detención. En todo este caso se ha sido muy riguroso para dar por acreditados los hechos. Finalmente, si bien el decreto que creó la Comisión y definió su mandato excluyó el caso de las personas detenidas en manifestaciones públicas y que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos, la Comisión interpretó esta definición en el sentido de incluir aquellos casos en que las personas, en alguna manifestación, fueron torturadas o sufrieron lesiones graves, sí correspondía reconocerlas como víctimas dentro de su mandato. En estos casos, que corresponden a 102 personas, también se acreditó la tortura o las lesiones a través denuncias, querellas o certificaciones médicas presentadas en la época o por otros documentos contemporáneos. La Comisión está consciente que, pese al elevado número de víctimas y casos de detenciones y torturas reconocidos, ellos no constituyen la totalidad de personas que sufrieron prisión política y tortura durante el régimen militar, ya que en este proceso sólo se revisaron aquellos testimonios presentados a la Comisión dentro de los plazos definidos para ello, y como una decisión voluntaria de las personas de relatar sus experiencias. No obstante, se estima que se trata de



Foja: 1

un número significativo, suficiente para obtener conclusiones relevantes para la reparación de las víctimas y para el proceso de paz social, integración y aprendizaje de parte de la sociedad. La Comisión realizó su labor dentro del mandato particular encomendado por el Presidente de la República y por lo tanto no se detuvo a examinar otros antecedentes judiciales o extrajudiciales de las víctimas, como tampoco los hechos a los cuales se vinculó -justificada o injustificadamente- a las víctimas, ya fueren anteriores a la prisión por razones políticas o tortura, o posteriores a éstas. Se analizó estrictamente la actuación de agentes del Estado respecto de las mismas, lo que, en muchos casos, no resultó fácil, pues se constató la participación de algunas víctimas en actos que habían significado, a su vez, la violación, muchas veces grave o muy grave, de los derechos de otras personas, uniformadas o civiles. Sin embargo, estas conductas han sido conocidas, investigadas y sancionadas por los organismos competentes, los que han aplicado castigos y sanciones. Nada de esto justifica, sin embargo, la reclusión en recintos secretos, ni menos la aplicación de torturas. En estos casos, la Comisión constató la presencia de elementos de convicción acerca de la privación de la libertad por motivaciones políticas, de la falta de garantías del debido proceso para su juzgamiento y el sometimiento a torturas. Nada justifica la violación del derecho que asiste a toda persona a ser juzgada y condenada en virtud de un debido proceso, ni nada justifica la práctica de la tortura (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura).

Relata que don Gustavo Enrique Villar Sánchez, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 1164, fue detenido con fecha 21 de septiembre de 1973 en la pensión donde vivía, ubicada en la calle Echaurren 306, comuna de Santiago, por Carabineros de la 8° Comisaría ubicada en la calle Toesca entre Avda. España y República. Hace presente que los Carabineros se sacaron las insignias que los identificaban con los grados, y robaron a las personas que habitaban la pensión. Recuerda que el actuar de los efectivos fue tan grosero que dos de esos Carabineros se pelearon entre ellos; uno estaba molesto porque no podía robar, en tono alterado le señaló a otro que acarreaba las pertenencias sustraídas, diciendo “ya po’, me toca a mí”, señala que identificó a los Subtenientes Carlos Manterola y Carlos Woker, entre quienes participaron



Foja: 1

en este allanamiento con robos de múltiples especies y dinero en efectivo, perteneciente a quienes habitaban en la pensión.

Expresa que una vez en la comisaría, lo interrogaron junto a otros detenidos, en la guardia de la comisaría. Había un gran número de oficiales y suboficiales, ninguno de ellos tenían puesta sus insignias del grado, pero en ese tiempo, recuerda, el cuello del uniforme de los oficiales tenían una parte de color gris, de manera que claramente se distinguía quién era oficial y quién no. Todos tenían una metralleta en sus manos, calcula que eran alrededor de unos 30 efectivos. Llamaban uno por uno a los detenidos, y los interrogaban respecto de sus familias, donde estudiaban, etc., luego los bajaron a los calabozos que había en un subterráneo, lugar donde pasaron toda la noche.

Manifiesta que al día siguiente los sacaron del calabozo muy temprano y los llevaron a la guardia, los detenidos eran cinco chilenos, entre ellos su representado, y cinco bolivianos. Los chilenos eran: Juan Carlos Piantanida Pavlovic, Héctor Maldonado, Julio Cesar Rivera y un estudiante de Agronomía de la U. de Chile de nombre Helman, no recuerda su apellido. Los bolivianos eran Fernando Zambrana, Ricardo Cautín, Julio Cesar Castañón, Fidel Castro, quien era duramente golpeado y tratado por los policías debido a su nombre.

Señala que en la guardia de la comisaría, el día 21 de septiembre de 1973, los formaron uno al lado del otro y el subteniente Carlos Woker, teniendo una pistola en las correas cruzadas que usaba Carabineros en esa época, más una metralleta, con la mano enguantada los golpeaba con una cachetada y decía “contigo quiero pelear concha de tu madre, vamos a pelear afuera”. Ante la negativa de los prisioneros, el subteniente Woker los pateaba y golpeaba a culatazos y decía “miren es maricón este concha de su madre”. Este trato vejatorio se repitió con cada uno de quienes estaban detenidos. En ese instante apareció un Oficial de Carabineros, quien al ver lo que estaba ocurriendo, le llama la atención al Subteniente Woker, el que, al verse conminado a dejar sus vejámenes por parte del Oficial, quien era el Jefe de la Guardia esa mañana, se insolenta teniendo como respuesta “Cuidado, no te quiero hacer pasar vergüenza delante de los detenidos”. Desgraciadamente para los detenidos, el Subteniente Woker estaba al



Foja: 1

mando de la patrulla que los trasladó al Estadio Nacional, quien golpeó a su representado y a los demás prisioneros durante el trayecto. Los hicieron tenderse en el piso del bus en el que los trasladaron, caminaban por encima de sus cuerpos, otros se sentaban poniendo los pies encima de la humanidad de los prisioneros, dándoles culatazos y golpes de pies, amenazaban constantemente con detener el bus y fusilarlos en el acto.

Explica que ingresaron al demandante, junto a otros prisioneros, al Estadio Nacional, por la entrada que da al sector bajo marquesina, en el lugar donde se ingresa a los camarines del sector norte o sur. Los hicieron hincar en el suelo y un grupo de conscriptos les cortó el pelo con una tijera, dejándoles mechones de pelo más largos y espacios en la cabeza sin nada de cabello, con la advertencia de no mirar a quien les cortaba el pelo. Don Gustavo Villar miró a quien lo hizo, por este acto recibió una patada en la espalda con un culatazo en la cabeza que lo tiró de boca al cemento.

Añade que en aquel lugar les daban un cucharón de comida y un pan al día, por lo que experimentó el dolor del hambre por las noches, más constantes pesadillas.

Recuerda que un día, para la sorpresa de todos quienes estaban detenidos, se abrió la puerta del camarín, relata que ello ocurrió entre las 18:00 o 19:00 horas y entró Monseñor Raúl Silva Henríquez, a quien solicitaron ayuda. El monseñor muy apesadumbrado les señaló que no podía hacer nada, y se percató que entre los prisioneros había un niño de 12 años.

No recuerda cuántos días estuvo en el camarín bajo marquesina, después de varios días lo trasladaron a unos camarines que hay bajo la galería que está en el sector de la puerta de maratón, en este lugar permaneció otro largo período de tiempo. Desde este lugar lo sacaron a interrogatorio al velódromo, lugar donde sufrió muchas golpizas de culatazos, pies y puños, a prisioneros de un número de 10 personas, quienes tenían asignado un nombre. El señor Villar pertenecía al grupo “cebra”.

Agrega que antes de ser interrogado lo mantuvieron en un túnel cercano al velódromo. Estaban permanentemente en oscuridad. Al lugar llegaban conscriptos a burlarse de los prisioneros. Relata el señor Villar, que le pidieron cantar. Él se rehusó, razón por lo obligaron a hacer ejercicios mientras era golpeado en la cabeza y los genitales.



Foja: 1

Señala que cuando lo llevan a interrogatorio, un conscripto le vendó los ojos. Recuerda que lo interrogaron 3 personas, quienes preguntaron su nombre, le preguntaron por sus padres, en qué colegio estudiaba y si conocía a un boliviano llamado Hugo Banzer.

Relata que después del interrogatorio, en el cual recibió golpes y por sobre todo escuchó a personas gritar que no les sacaran las uñas, además de ver el trato cruel y degradante que recibió un periodista de nacionalidad paraguaya, a quien llamaban guaraní.

Expone que el día 12 de octubre de 1973 fue puesto en libertad. Su liberación se hizo ante canales de televisión que grabaron la liberación de los prisioneros, dándole una connotación de misericordia al acto del régimen. Un uniformado les señaló que no se metieran en problemas, pues no “la sacarían tan barata la próxima”.

Refiere que después de su liberación, el demandante se presentó en el Liceo de Hombres N° 2 Miguel Luis Amunátegui, lugar en el que ya no había rector y fue reemplazado por el Inspector General Sr. Rapozo, quien le preguntó cómo justificaba su inasistencia. El señor Villar presentó un documento que le dieron en el Estadio Nacional, y que según el Mayor de Ejército serviría para justificar inasistencia al Liceo, Universidad o Trabajo, según fuera el caso. El señor Rapozo, al ver el documento se exaltó, y le dijo “agradece que no te expulso”. Uno de los prisioneros del Estadio Nacional, que más tarde se encontró en la calle, le ofreció salir del país con ayuda diplomática, a lo cual el señor Villar no accedió, cosa de la que después se arrepentiría.

Sostiene que en 1974 se inscribió en el Ministerio de Educación para rendir exámenes como alumno libre y así terminar su enseñanza media, también se casó con quien es su cónyuge Lucia Paulina Cruz Jerez el 1 de julio de 1974 y nació su primera hija, Andrea Paulina Villar Cruz. Debido a haber sido prisionero, le costó mucho encontrar trabajo, lo rechazaron en un sinnúmero de ocasiones, tuvo que vender café en la calle, y no lo contrataban porque en su currículum no figuraban actividades académicas ni de trabajo, y cuando le preguntaban por qué no había terminado de asistir a la escuela, respondía que había sido prisionero en el Estadio, razón por la cual lo rechazaban.



Foja: 1

Indica que en diciembre de 1977 falleció la hija del matrimonio, producto de un accidente doméstico, lo que fue un duro golpe para el demandante y su familia. A raíz de aquello, y de una larga cesantía, su madre le envió un recorte de un diario en que una empresa pública buscaba Operador Programador y Analista en Procesamiento de Datos. El señor Villar envió su currículum y fue preseleccionado. Sin embargo, se trataba de un cargo en el Ejército de Chile. Después de pasar varios filtros de selección, le dijeron que habría una lista de los aceptados. Cuando concurrió a mirar los listados, no figuraba en los aceptados ni los rechazados. Al preguntar, un funcionario le preguntó su nombre y al señalar que era Gustavo Villar, el militar solo se limitó a contestar, tú eres Gustavo Villar, sin decir nada más, razón por la cual don Gustavo Villar estima que esa detención lo marcó de por vida, afectándolo física, psicológica y laboralmente.

En cuanto al daño producido, aduce que de los tormentos anteriormente relatados a los que fue sometido el demandante, se desprende de manera indubitada que, como consecuencia de las torturas, se le ha producido un daño físico y psíquico incommensurable, que tienen el carácter de permanente, pues hasta el día de hoy sufre los resultados de la tortura.

Precisa que justamente son los daños emocionales, psíquicos, los que se demandan a través de su presentación. El daño moral ha sido entendido por la Excma. Corte Suprema como “un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica de un individuo y que se traduce en el agobio que genera el haber sufrido una lesión considerable y el riesgo para su vida que ello representó, no requiere de prueba, las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, que no pueden desconocerse en ningún procedimiento aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, demuestra que una lesión tan considerable necesaria e indefectiblemente conlleva una aflicción psíquica. Ahora bien, su evaluación debe hacerse conforme a la prueba tasada o legal y a la apreciación prudencial del sentenciador, lo que es distinto a la afirmación de que el daño moral requiere prueba. La dimensión del daño moral se obtiene indudablemente y sin lugar a discusión, de las pruebas consideradas por la



Foja: 1

juez a quo en la sentencia, de esta forma, necesariamente el actor debe ser indemnizado, pues el artículo 2314 del Código Civil no distingue clases o tipos de daños”. (Corte Suprema, Rol: 5946-2019)

Afirma que por todo ello, y en base a la representación que inviste como apoderado y abogado patrocinante del demandante, demanda la suma de \$200.000.000.- para el actor, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o el monto indemnizatorio que el tribunal estime.

Respecto del derecho, expresa que de los hechos delictivos expuestos es responsable civilmente el Estado de Chile, ya que sus hechores, al tiempo de haberse cometido estos ilícitos, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o Civiles adscritos a las mismas, quienes estaban revestidos de autoridad pública.

Asevera que los hechos ilícitos han sido objeto de un reconocimiento expreso por parte del Estado de Chile, en el que éste asume su responsabilidad a través de diferentes actos de instrumentos jurídicos, como en el Informe emitido por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech. En dicho informe los demandantes fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura.

Arguye que la comisión de estos ilícitos, cometidos por agentes del Estado, redundan en la responsabilidad del mismo por el daño moral causado a sus representados. Esta responsabilidad encuentra su fundamento, en primer lugar, en un principio general de derecho administrativo que obliga al Estado responder por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a víctimas que no están obligados a soportarlo. Por ende, la responsabilidad del estado emana del derecho administrativo, específicamente de la Constitución Política de 1925, vigente a la época de los hechos acaecidos, de la Constitución Política de 1980 y del derecho internacional.

Sostiene que, en efecto, la Constitución de 1925, en su artículo 10 N°1 consagraba el principio de igualdad ante la ley, razón por la cual resulta inconstitucional que un sujeto que ha sido dañado por actos u



Foja: 1

omisiones del Estado no sea indemnizado. Por otra parte, el artículo 1 de la carta magna de 1925 establecía un gobierno republicano y democrático. En palabras del profesor Eduardo Soto Kloss: “la responsabilidad del Estado chileno radica en que es una república, por tanto los sujetos públicos y privados deben responder de sus actos u omisiones por esta insertos en un estado de Derecho.

Manifiesta que el artículo 10 de la Constitución de 1925 garantizaba la inviolabilidad de las propiedades, sin distinciones. De los hechos anteriormente descritos, se desprende que un órgano del Estado, como lo es el Ejército de Chile, afectó el derecho de propiedad de sus representados de forma arbitraria, sin existir sentencia ni expropiación por utilidad pública. Se les dañó en sus bienes personalísimos, atentando contra su esfera subjetiva y causándoles daño moral.

Explica que el artículo 10 N° 9 del mismo cuerpo legal aseguraba la igual repartición de las cargas públicas. El haber el Estado de Chile causado daño a sus representados, de manera antijurídica, implica una ruptura a la igual repartición de cargas públicas. Sus patrocinados, a diferencia de muchos otros compatriotas, fueron sometidos a tratos inhumanos y vejatorios por agentes estatales.

En lo concerniente a la imprescriptibilidad de la acción, hace presente el artículo 5 de la Constitución de 1980, que señala que la soberanía tiene como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que los órganos del estado deben respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. Justamente, es el artículo mencionado el que permite en nuestro país aplicar los tratados internacionales que obligan a reparar íntegramente los daños causados por violaciones a los derechos humanos, adquiriendo estos principios rango constitucional.

Indica que pretender aplicar las reglas de prescripción establecidas en el XXXV del Código Civil purgaría con la obligación del Estado de Chile de reparar íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad.

Advierte que el artículo 27 de la Convención de Viena, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, prescribe que las partes no



Foja: 1

podrán invocar su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Afirma que si se aplicaran las normas de prescripción del Código Civil para no ser obligado nuestro Estado a indemnizar el daño causado a las víctimas, haría comprometer la responsabilidad internacional del Estado chileno. Por otra parte, la Convención Sobre Derechos Humanos, ratificada y vigente en nuestro país, señala en el artículo 63.1 “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Explica que de lo anterior resulta manifiesta la obligación del Estado chileno de indemnizar a las personas que sufrieron daños debido a las actuaciones de agentes estatales que causaron crímenes de lesa humanidad. Dicha obligación, en virtud del artículo 5 de la Constitución de 1980, tiene carácter constitucional.

Plantea que, en suma, los crímenes de lesa humanidad tienen un carácter imprescriptible y el Estado no puede invocar las normas de derecho interno para exonerarse de su responsabilidad, pues esto riñe con el derecho internacional y los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.

Concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos:

- a) acción u omisión del agente
- b) daño
- c) nexo causal entre los daños y la acción
- d) no concurrencia de causales de exención de responsabilidad

Fundamentos del derecho internacional que obligan al Estado a Indemnizar:

Señala que de los hechos narrados, se puede colegir que agentes del Estado incurrieron en una falta personal, privando ilegítimamente a sus representados de su libertad y sometiéndolos a torturas.

Refiere que la razón para aquello fue que el propio Estado de Chile ordenó a sus agentes obtener información relevante para la seguridad



Foja: 1

nacional, sin embargo, los agentes estatales hicieron abuso de aquella instrucción cometiendo crímenes de lesa humanidad, razón por la cual el Estado resulta absolutamente responsable.

Expresa que la responsabilidad del Estado debe observarse no solamente a la luz del derecho interno, sino que en armonía con las convenciones y tratados internacionales vigentes en nuestro país, reglas de derecho constitucional y de derecho consuetudinario internacional; teniendo especial consideración lo que señala el artículo 27 de la Convención de Viena que señala que las partes no pueden invocar derecho interno para excusarse de cumplir con sus obligaciones internacionales.

Procedencia de la Indemnización por daño moral:

Menciona que en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema se ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio en sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona imputable a otra.

Funda su pretensión en lo establecido en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas citadas, artículo 2329 y siguientes del Código Civil.

En consecuencia, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile, representado, -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizada, acogerla a tramitación, y -en definitiva- acogerla en todas sus partes, declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por don Gustavo Enrique Villar Sánchez, ya individualizado, la suma de \$ 200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 13 de febrero de 2020, a folio 10, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada.

Con fecha 20 de febrero de 2020, a folio 11, el demandante evacuó el trámite de la réplica, ratificando todo lo expuesto en la demanda,



Foja: 1

sin tener nuevos hechos que aportar debido a la rebeldía de la demandada.

Con fecha 4 de marzo de 2020, a folio 13, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien evacúa la réplica respecto de la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida, solicitando su total rechazo.

Explica que comparece doña María Alejandra Arriaza Donoso, en representación de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando sea condenado a pagar la suma \$200.000.000.- más reajustes e intereses, como reparación por el daño moral sufrido con motivo de la prisión política y torturas de que fue víctima, hechos cometidos por agentes del Estado, relatando episodios ocurridos entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre de 1973. Invoca como fundamento jurídico de su acción los artículos 5º; 6; 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4º del DFL 1-19.653, 63 de la “Convención Americana de Derechos Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica” y en general del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, todo lo cual configuraría una responsabilidad extracontractual imprescriptible del Estado.

En primer lugar, opone la excepción de reparación satisfactiva, señalando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Agrega que sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Explica que el denominado dilema “justicia versus paz” es uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una



Foja: 1

sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Asevera que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. El éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo de los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Agrega que, en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Refiere que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, y que, en este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Menciona que, como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el



Foja: 1

favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Afirma que, en cuanto al segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa a la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Sostiene que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Hace presente que el Ejecutivo entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada toda la sociedad, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos objetivos de estas normas reparatorias.

Adiciona que en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto, y a la noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación, e incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Sostiene que esta idea reparatoria se plasmó de manera clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18, y asumida esta idea reparatoria, la



Foja: 1

ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992) han establecido los mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación.

Expresa que, en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Hace presente que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al Tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, explica que diversas leyes han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a quienes fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron dos posiciones: quienes sostenían que la reparación debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Manifiesta que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:

- a) Pensiones: \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech)
- b) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992
- c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.
- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$21.256.000.000.-



Foja: 1

Indica que, en consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, y que, siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Aduce que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar, y que, como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala que, en cuanto a las reparaciones específicas, el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley 19.992 y sus modificaciones, y que la ley 19.992 y sus modificaciones establecieron una pensión anual de reparación y otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.-, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Precisa que si se proyecta el pago de las pensiones Valech por los próximos diez años, además el demandante recibirá una suma global aproximada a los \$24.000.000.- por este concepto. De esta forma, conforme lo acreditará, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en dicho cuerpo legal.

Menciona que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, expone que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que



Foja: 1

también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. Refiere que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la ley 19.234 como de la ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Añade que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa.

Añade que, a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$ 4.580.892.- Afirma que este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea; y el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Señala que se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones que sean producto de la prisión política o tortura, y que se establecen beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.



Foja: 1

Respecto de las reparaciones simbólicas, explica que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD. HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Arguye que la doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Cita doctrina.

Asevera que, en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993.

b) El establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, obra inaugurada el 11 de enero de 2010 y cuyo objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DD. HH., todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores.

Asegura que, de todo lo expresado hasta ahora, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD. HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que han



Foja: 1

apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD. HH.

Explica que tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, y de esta forma, los referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Esgrime que, en este punto, el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la ley 19.123, adicionando que lo anterior ha sido ratificado por la Excm. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

Refiere que diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Afirma que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas, y en el mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Manifiesta que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, y todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser solucionado



Foja: 1

estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos, e incluso este cambio puede ser motivado por casos que pueden no ser representativos del universo de víctimas y acentuar las desigualdades sociales entre ellas.

Expone que, tal como indica Lira, es el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional, y dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones, debilitando la decisión política y administrativa de reparación.

Menciona que estando la acción interpuesta basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala que, además de la excepción de reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Puntualiza que conforme al relato efectuado por el demandante, la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrió entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre de 1973.

Expresa que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 16 de enero de 2020, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, y, en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja



Foja: 1

y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Sobre esta materia, advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público, y las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Cita el artículo 2497 del cuerpo legal citado, el cual consagra, con carácter obligatorio, el principio de que la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Explica que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

Manifiesta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Aduce que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Menciona que, como es de público conocimiento, nuestra Excm. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:



Foja: 1

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Indica que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, lo que solicita se tenga en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013, que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

Sostiene que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, y su



Foja: 1

contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté expuesta a extinguirse por prescripción.

Advierte que, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Afirma que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Expone que, finalmente, en cuanto a la alegación contenida en la demanda, de imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales -como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos-, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Expresa que su planteamiento ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y lo mismo aconteció en



Foja: 1

la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Refiere que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Concluye que, con el mérito de lo expuesto precedentemente, el tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

En relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Indica que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Añade que tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra



Foja: 1

de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Cita jurisprudencia.

Hace presente que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica de las partes como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Menciona que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva y prescripción de la acción deducida, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234; 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que “seguirá percibiendo a título de pensión”, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, y no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Indica que, a la fecha de notificación de la demanda, y



Foja: 1

mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Afirma que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada. Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acogiera la demanda y se le condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, expone que el artículo 1551 del Código Civil establece que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, y la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo ha decidido. Por consiguiente, en el caso de que el tribunal decida acoger la acción y le condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En consecuencia, solicita se tenga por evacuada la dúplica respecto de la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar la acción deducida en todas sus partes, o en subsidio, rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

Con fecha 16 de abril de 2020, a folio 17, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 10 de febrero de 2023, a folio 53, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:



Foja: 1

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña María Alejandra Arriaza Donoso, en representación de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, solicitando acogerla en todas sus partes, declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por don Gustavo Enrique Villar Sánchez, ya individualizado, la suma de \$ 200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos; todo con costas, de acuerdo a los antecedentes reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, a folio 10, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada, y a folio 13, la misma evacuó el trámite de la dúplica, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, o en subsidio, la rebaja sustancial de los montos indemnizatorios pretendidos, conforme a los antecedentes vertidos en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que, la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó la siguiente prueba al proceso:

A folio 36:

1.- Copia de certificado emitido por el Jefe del Campo de Detenidos “Estadio Nacional”, Coronel Jorge Espinoza Ulloa, con fecha 12 de octubre de 1973, en el cual consta que don Gustavo Enrique Villar Sánchez permaneció detenido en el Estadio Nacional desde el 21 de septiembre hasta el 12 de octubre. Se encuentra certificada como copia del original ante Notario, con fecha 29 de enero de 2019.

2.- Copia de citación EMGE. JIC. (0) N° 1120/1, de 8 de agosto de 1984, dirigida a don Gustavo E. Villar Sánchez, suscrita por el Jefe de Informática y Computación del Ejército, Teniente Coronel don Hernán Aldana Martínez. Se encuentra certificada como copia del original ante Notario, con fecha 29 de enero de 2019.

3.- Copia fiel del original de carpeta de ingreso y antecedentes de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.



Foja: 1

A folio 37:

4.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre de 2015.

5.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 22.856-15, de fecha 29 de diciembre de 2015.

6.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 19301-18, de fecha 20 de septiembre de 2018.

7.- Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

8.- Copia del Capítulo VIII “Consecuencia de la prisión política y la tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

A folio 38:

9.- Informe de daño psicológico y social de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, de fecha 12 de octubre de 2022, suscrito por doña Alejandra Vargas Neira, psicóloga clínica, y don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo de CINTRAS.

A folio 47:

10.- Copia fiel del original de carpeta de ingreso y antecedentes de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

11.- Copia de certificado emitido por el Jefe del Campo de Detenidos “Estadio Nacional”, Coronel Jorge Espinoza Ulloa, con fecha 12 de octubre de 1973, en el cual consta que don Gustavo Enrique Villar Sánchez permaneció detenido en el Estadio Nacional desde el 21 de septiembre hasta el 12 de octubre. Se encuentra certificada como copia del original ante Notario, con fecha 29 de enero de 2019.

12.- Copia de citación EMGE. JIC. (0) N° 1120/1, de 8 de agosto de 1984, dirigida a don Gustavo E. Villar Sánchez, suscrita por el Jefe de Informática y Computación del Ejército, Teniente Coronel don Hernán Aldana Martínez. Se encuentra certificada como copia del original ante Notario, con fecha 29 de enero de 2019.



Foja: 1

13.- Copia del Capítulo VIII “Consecuencia de la prisión política y la tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

14.- Informe de daño psicológico y social de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, de fecha 12 de octubre de 2022, suscrito por doña Alejandra Vargas Neira, psicóloga clínica, y don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo de CINTRAS.

A folio 48:

15.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre de 2015.

16.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 22.856-15, de fecha 29 de diciembre de 2015.

17.- Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 19301-18, de fecha 20 de septiembre de 2018.

18.- Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

19.- Fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 16395-2019, de fecha 25 de junio de 2020.

20.- Certificado de nacimiento de don Gustavo Enrique Villar Sánchez, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 3 de enero de 2023.

CUARTO: Que, por su parte, la demandada acompañó el siguiente documento:

A folio 32:

1.- Oficio ORD. N° 64508/2020 que informa beneficios de reparación de don Gustavo Villar Sánchez, emitido por el Instituto de Previsión Social con fecha 28 de febrero de 2020.

QUINTO: Que, al no encontrarse controvertido por el demandado la calidad de víctima de prisión política y tortura del demandante ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos, se tiene como hecho de la causa que el actor fue víctima de prisión política y tortura por parte de agentes del Estado de Chile.



Foja: 1

SEXTO: Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el considerando anterior, corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.

SÉPTIMO: Que la demandada opuso en primer término la excepción de reparación satisfactiva, por haber sido ya indemnizado el demandante.

OCTAVO: Que, al respecto cabe señalar que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Al respecto, la Ley 19.992 y sus modificaciones, correspondiente a las asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, situación en la que se encuentra el demandante, y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, mas no una indemnización de daño material y/o moral sufridos por las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata, lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducida por la parte demandada.

NOVENO: Que, seguidamente, cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO: Que, en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves.



Foja: 1

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal.

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del Estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N° 3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de



Foja: 1

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:

“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

DÉCIMO TERCERO: Que, además, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos –artículos 4 y 5– como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7 al 10–, ratificados por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

DÉCIMO QUINTO: Que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho



Foja: 1

internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.

De seguir la tesis de la demandada, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.

DÉCIMO SEXTO: Que, establecido lo anterior y rechazada la excepción de prescripción, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de los perjuicios demandados, los cuales el demandante hace consistir en daño moral, el que avalúa en la suma total de \$200.000.000.-

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al daño moral demandado, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, el demandante se valió de prueba documental, acompañando a folio 38 un “Informe de daño psicológico y social”, suscrito



Foja: 1

por la profesional Alejandra Vargas Neira, Psicóloga Clínica, y por el Director Ejecutivo de CINTRAS, José Miguel Guzmán Rojas, por medio del cual se informan las consecuencias en la salud mental, social, moral y familiar de don Gustavo Enrique Villar Sánchez.

Respecto del daño moral sufrido por el demandante, del informe referido se desprende *“Experiencia de situación traumática de detención y tortura física, psicológica y consecuencias observadas en la evaluación, en contexto de trauma psicosocial. Manifestaciones conocidas y congruentes con la experiencia de tortura en contextos de impunidad.*

Observamos el desarrollo de diversas expresiones psicológicas de estrés traumático temporalmente posterior y comprensibles a eventos traumáticos narrados, en diversos momentos de su curso vital (re-experimentación, hiperactivación, marca identitaria, retraumatización), con exacerbaciones sintomáticas con asociación contextuales. Identificación de manifestaciones psicológicas crónicas a largo plazo, con características de la personalidad derivadas. Cuadro clínico es congruente con relato consistente, temporalmente posteriores a eventos narrados. Algunos fenómenos como las características de la angustia traumática y la forma del relato, tienen una relación directa con experiencia de trauma psicosocial y no son causadas por otras etiologías. Experiencias traumáticas de este tipo causan variaciones persistentes en su personalidad.

Patologías médicas, dolor osteo-articular, posteriores a situación traumática con exacerbaciones con factores de estrés psicológico y sufrimiento psíquico y podrían tener asociación de tipo causal (factor de riesgo). El cuadro clínico psicológico tiene un curso mantenido con exacerbaciones periódicas, ha impactado su funcionamiento social, afectivo y de relaciones interpersonales, además de causar sufrimiento psicológico significativo, tanto a nivel personal como familiar.

(...) El funcionamiento global está alterado por lo menos en un 60% debido a las consecuencias bio-psico-sociales de los trastornos psicológicos que presenta la persona evaluada, ya que existen síntomas continuos de curso crónico y dificultades, principalmente, en la esfera familiar. Esta disminución del funcionamiento no toma en cuenta las discapacidades subsidiarias de los restantes problemas de salud. Los elementos evaluados y diagnosticados en la



Foja: 1

persona evaluada requieren un tratamiento psiquiátrico y psicológico de tiempo prolongado; que por lo general requieren intervenciones que exceden varios años (...)

Se recomienda que don Gustavo Enrique Villar Sánchez mantenga un tratamiento psicológico en el contexto de una reparación integral”.

Que, valorada la prueba anterior de conformidad con las reglas dispuestas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y teniendo en especial consideración el hecho ilícito del que fue víctima el demandante, así como sus consecuencias y las circunstancias en que los hechos acontecieron, ha de tenerse por suficientemente acreditado el daño moral alegado, regulando esta juez la indemnización por concepto de daño moral prudencialmente en la suma de \$4.500.000.-

DÉCIMO NOVENO: Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

VIGÉSIMO: Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 1437, 1698 y 1702 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra de 1949 y Ley 19.992, se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta con fecha 26 de diciembre de 2019, a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño moral, la suma de \$4.500.000.-, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 19° y 20° del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado.

Regístrese y notifíquese.



Pronunciada por Giselle Sorhaburu Carvajal, Jueza Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Mayo de dos mil veintitrés**

